



índice

Geopolítica mundial y seguridad alimentaria: cómo los conflictos, la energía y las rutas comerciales condicionan el acceso a los alimentos	03
<i>Simplificar sin retroceder:</i> el dilema verde de la nueva política agroalimentaria europea	12
Desperdicio alimentario: Claves, aplicación práctica y su impacto en las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha	18
<i>Ayudas temporales, crisis energética y seguridad alimentaria</i>	25



***Geopolítica mundial y seguridad
alimentaria:*** cómo los conflictos,
la energía y las rutas comerciales
condicionan el acceso a los
alimentos



La seguridad alimentaria ha dejado de ser una cuestión exclusivamente agronómica. En un mundo integrado por cadenas de suministro, rutas marítimas, mercados energéticos y fertilizantes globalizados, una crisis localizada puede alterar el precio del pan en países lejanos, modificar las decisiones de siembra de agricultores de otro continente y reducir la capacidad de millones de hogares para acceder a una dieta suficiente y saludable.

La situación geopolítica mundial actual muestra con claridad esta interdependencia. La persistencia del conflicto en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y el mar Rojo, la inestabilidad en el Sahel, Sudán y otras regiones africanas, la rivalidad comercial entre grandes potencias y la fragmentación de las cadenas logísticas están actuando sobre los mismos eslabones: energía, fertilizantes, transporte, comercio de cereales, financiación pública y ayuda humanitaria. El resultado no siempre es una falta física de alimentos, sino una combinación de encarecimiento, incertidumbre, pérdida de ingresos y debilitamiento de la capacidad de respuesta de los Estados.

1. De la producción de alimentos a la seguridad alimentaria estratégica

La seguridad alimentaria se apoya en cuatro dimensiones: disponibilidad de alimentos, acceso económico y físico, estabilidad del suministro y utilización nutricional adecuada. La geopolítica puede dañar cualquiera de ellas. Una guerra puede destruir cultivos y desplazar población; una sanción o un bloqueo puede alterar el comercio; una subida del petróleo encarece transporte, riego, maquinaria y fertilizantes; una crisis fiscal puede limitar subsidios, protección social y compras públicas de alimentos.

Por eso, las crisis alimentarias recientes no se explican por una única causa. El informe *Global Report on Food Crises 2025* señaló que en 2024 más de 295 millones de personas en 53 países y territorios sufrieron niveles agudos de hambre, impulsados por la combinación de conflictos, choques económicos, fenómenos climáticos extremos y desplazamientos forzados. La FAO y el WFP (World Food Programme, conocido en español como el Programa Mundial de Alimentos,

PMA) también advirtieron para el periodo noviembre de 2025-mayo de 2026 que la inseguridad alimentaria aguda se estaba agravando en 16 focos críticos, en un contexto de violencia, shocks económicos, clima extremo y escasez de financiación humanitaria.

La novedad de 2026 es que el riesgo geopolítico se ha desplazado de nuevo hacia los mercados de energía y fertilizantes. El Banco Mundial estimó en abril de 2026 que los precios de la energía podrían aumentar un 24 % en el año, hasta su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y que los precios de las materias primas crecerían un 16 %, impulsados por energía y fertilizantes. Este tipo de shock afecta a todas las regiones, pero no de la misma manera.

2. Los canales de transmisión: cómo una crisis geopolítica llega al plato

Energía, transporte y fertilizantes

El vínculo más directo entre geopolítica y alimentos es la energía. El gas natural es una materia prima esencial para la producción de fertilizantes nitrogenados; el petróleo condiciona el transporte marítimo y terrestre, la maquinaria agrícola, la pesca y muchos costes industriales. Cuando suben la energía y los fertilizantes, se encarece la producción agraria y se reducen los márgenes de los agricultores. Si el agricultor aplica menos fertilizante o cambia a cultivos menos intensivos, el impacto puede sentirse meses después en los rendimientos.

La evolución reciente de los precios alimentarios confirma esta sensibilidad. En abril de 2026, el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO alcanzó los 130,7 puntos, un 1,6 % más que en marzo. Esto quiere decir que los precios internacionales de los principales alimentos siguieron subiendo en abril de 2026. La subida no fue enorme, pero confirma que los mercados alimentarios siguen siendo muy sensibles a tensiones externas como la energía, los fertilizantes, el comercio internacional o los conflictos geopolíticos. Aunque los mercados mundiales de cereales seguían relativamente abastecidos, el encarecimiento de la energía, los fertilizantes y la logística podía afectar a las decisiones de siembra de trigo y maíz, trasladando un shock geopolítico actual a la producción de campañas posteriores.

Rutas comerciales y puntos de estrangulamiento

Los alimentos no viajan solos: viajan con combustible, seguros, financiación, buques, contenedores y puertos seguros. El mar Negro, el mar Rojo, el canal de Suez, el estrecho de Ormuz o el canal de Panamá son puntos de paso cuya alteración puede encarecer y retrasar suministros. En 2022, la guerra en Ucrania mostró la importancia del mar Negro para los cereales y fertilizantes. Las tensiones posteriores en corredores energéticos y marítimos han confirmado otra lección: las rutas de la energía también son rutas alimentarias indirectas, porque condicionan fertilizantes, transporte, pesca, refrigeración y costes industriales.



Esta dependencia es especialmente delicada para países importadores netos de alimentos, fertilizantes o energía. Cuando suben simultáneamente el coste del trigo, del flete, del combustible y del dólar, el problema deja de ser solo comercial: se convierte en un problema de estabilidad social y presupuestaria.

Financiación pública, deuda y ayuda humanitaria

La capacidad de los Estados para amortiguar una crisis alimentaria depende de sus cuentas públicas. Los países con alto endeudamiento, baja recaudación o moneda débil tienen menos margen para subsidiar pan, combustible o fertilizantes, reforzar redes de protección social o importar alimentos de emergencia. Además, los recortes o retrasos en la financiación humanitaria multiplican el daño en zonas de conflicto, donde la población depende directamente de asistencia alimentaria.

El WFP también advertía en 2026 que 318 millones de personas ya afrontaban niveles de hambre de crisis o peores, y que cerca del 70 % de las personas con inseguridad alimentaria aguda vivían en países frágiles o afectados por conflictos. Esta cifra refleja una realidad esencial: la comida puede existir en el mercado mundial, pero no llegar a quien la necesita si faltan seguridad, ingresos, divisas o acceso humanitario.

3. Impacto por grandes zonas del mundo

Oriente Próximo y Norte de África: dependencia importadora y presión social

Oriente Próximo y el Norte de África son una de las regiones más sensibles a la geopolítica alimentaria. Muchos países dependen de importaciones de cereales, energía barata o subsidios alimentarios para garantizar estabilidad social. La región combina escasez estructural de agua, presión demográfica, dependencia de trigo importado y exposición directa a conflictos.

En países afectados por guerras o fragilidad institucional –Yemen, Siria, Palestina, Líbano o Sudán en su conexión con el espacio del mar Rojo– el problema es doble. Por un lado, se encarecen alimentos, combustible y transporte. Por otro, se bloquean ingresos, empleo, producción local y ayuda. En los países importadores de trigo, una subida del precio internacional se convierte rápidamente en un problema político, porque el pan sigue siendo un alimento básico y socialmente sensible.

Cualquier tensión prolongada en esta zona tiene efectos asimétricos. El aumento de petróleo, gas y fertilizantes puede beneficiar fiscalmente a algunos exportadores de hidrocarburos, pero perjudica a muchos importadores al elevar los costes de alimentos, transporte y producción. El resultado es una región más polarizada: Estados con capacidad financiera para amortiguar el choque frente a otros con alto riesgo de deterioro alimentario.

África subsahariana: el epicentro del riesgo alimentario

África subsahariana es la región donde la tensión geopolítica se traduce con mayor rapidez en hambre aguda. No porque no produzca alimentos, sino porque conviven conflictos armados, sequías, desplazamientos, dependencia de importaciones en zonas urbanas, debilidad de infraestructuras, bajos ingresos familiares y escaso margen fiscal.

El Banco Mundial advertía en marzo de 2026 que más de 87 millones de personas afrontaban hambre en África oriental y meridional, y que 52 millones podrían estar en inseguridad alimenta-

ria aguda en África occidental y central a mediados de 2026. En Sudán, Sudán del Sur, Somalia, el Sahel, la República Democrática del Congo o el norte de Nigeria, la inseguridad alimentaria no responde solo al clima, sino a la violencia, el desplazamiento, la pérdida de medios de vida y las restricciones de acceso humanitario.



La subida de fertilizantes es especialmente grave. En sistemas agrícolas de bajos ingresos, los agricultores reducen dosis de abonado o renuncian a determinados insumos cuando los precios se disparan. Esa decisión protege la liquidez inmediata, pero puede reducir rendimientos en la campaña siguiente. Por eso, una crisis energética de 2026 puede convertirse en una crisis de producción en 2027. La inseguridad alimentaria africana es, en este sentido, acumulativa: cada shock deja menos capacidad para resistir el siguiente.

Europa: seguridad de suministro, pero vulnerabilidad de costes

Europa no afronta, en general, un riesgo de falta física de alimentos comparable al de las regiones más frágiles. Su vulnerabilidad es distinta: inflación alimentaria, encarecimiento de insumos, presión sobre rentas agrarias, dependencia exterior de fertilizantes y energía, y tensión política sobre el equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y autonomía estratégica.

La guerra en Ucrania ya mostró que Europa no puede separar política agraria, energía y seguridad. Ucrania sigue siendo una pieza relevante en el mercado de cereales y aceites, aunque su producción de trigo continúa por debajo de los niveles previos al conflicto. A la vez, la UE necesita reducir dependencia de fertilizantes fósiles, reforzar producción interna, impulsar fertilización eficiente, biogás, agricultura de precisión y cadenas logísticas resilientes.

El riesgo europeo no es el hambre masiva, sino la pérdida de asequibilidad para hogares vulnerables y la erosión de la viabilidad económica de explotaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroindustriales. Si la respuesta se limita a compensar costes sin acelerar eficiencia energética y autonomía en insumos, Europa comprará tiempo, pero no reducirá vulnerabilidad.

Asia: entre grandes reservas y focos de fragilidad

Asia reúne realidades muy diferentes. China e India cuentan con grandes capacidades productivas, reservas, políticas públicas y peso comercial. En cambio, países importadores o frágiles —como Afganistán, algunos Estados del sur de Asia o economías muy dependientes de combustibles y fertilizantes importados— son mucho más sensibles a los choques externos.

El arroz añade un elemento propio. A diferencia del trigo o el maíz, el mercado internacional del arroz es relativamente estrecho en comparación con el consumo total, de modo que restricciones a la exportación, malas cosechas o aumentos de costes en pocos países exportadores pueden

mover precios con rapidez. En abril de 2026, la FAO registró un aumento del índice de precios del arroz impulsado por mayores costes de producción y comercialización en países exportadores, en un contexto de encarecimiento del crudo y derivados.

Asia también muestra otra dimensión geopolítica: la seguridad alimentaria se conecta con la seguridad energética y con la estabilidad de los fertilizantes. Los países capaces de subvencionar insumos y gestionar reservas pueden contener el impacto. Los que dependen de importaciones caras y tienen monedas débiles se enfrentan a una pérdida más rápida de acceso económico a alimentos.

América Latina y el Caribe: potencia exportadora con desigualdad interna

América Latina es una de las grandes regiones exportadoras de alimentos del mundo, con países clave en soja, maíz, carne, azúcar, café o frutas. Brasil y Argentina pueden beneficiarse de ciertos aumentos de precios internacionales, pero eso no garantiza seguridad alimentaria interna. Una región puede exportar alimentos y, al mismo tiempo, tener hogares que no acceden a dietas saludables por pobreza, inflación o desigualdad.

Los países más vulnerables son los importadores netos de alimentos y combustibles, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Las islas caribeñas combinan dependencia de importaciones, exposición a huracanes, costes logísticos elevados y sensibilidad del turismo. Haití representa el caso extremo de cómo violencia, colapso institucional, inflación y bloqueo de medios de vida pueden traducirse en crisis alimentaria incluso sin que el mercado mundial carezca de alimentos.

En América Latina, la geopolítica también opera a través de divisas y fertilizantes. Una depreciación monetaria encarece importaciones de trigo, combustibles, maquinaria o fertilizantes. Para productores exportadores puede mejorar ingresos en moneda local, pero para consumidores urbanos pobres supone alimentos más caros.

Pequeños Estados insulares: el riesgo de la distancia

Los pequeños Estados insulares en desarrollo son especialmente vulnerables porque dependen de importaciones, transporte marítimo, combustibles y cadenas logísticas largas. Su problema no es

solo producir poco alimento local, sino pagar más por cada tonelada importada cuando suben fletes, seguros, petróleo o precios internacionales.

Además, muchos de estos países dependen del turismo para generar divisas. Por ello, una crisis geopolítica que encarezca los vuelos, reduzca la llegada de turistas o altere los suministros puede afectar a la vez a los ingresos nacionales y al coste de los alimentos importados. En con-

secuencia, la seguridad alimentaria de los Estados insulares requiere reservas, diversificación logística, producción local adaptada al clima y redes de protección social.

4. Matriz comparativa de vulnerabilidad

Zona	Vulnerabilidad principal	Canal geopolítico dominante	Riesgo alimentario
Oriente Próximo y Norte de África	Alta dependencia de cereales importados, agua escasa y subsidios sensibles	Conflictos, energía, rutas marítimas, fertilizantes	Encarecimiento del pan, presión fiscal e inestabilidad social
África subsahariana	Conflictos, desplazamientos, pobreza rural y escaso margen fiscal	Violencia, ayuda humanitaria, fertilizantes y clima	Hambre aguda, pérdida de cosechas y malnutrición
Europa	Costes de energía e insumos, dependencia parcial de fertilizantes	Ucrania, energía, fertilizantes y autonomía estratégica	Inflación alimentaria y presión sobre rentas agrarias
Asia	Gran heterogeneidad; algunos países con reservas y otros muy importadores	Arroz, fertilizantes, energía y restricciones comerciales	Volatilidad de precios y tensión en hogares pobres
América Latina y Caribe	Desigualdad interna, dependencia importadora en Caribe y Centroamérica	Divisas, fertilizantes, fletes y clima extremo	Exportaciones dinámicas, pero acceso desigual a dietas saludables
Pequeños Estados insulares	Lejanía, importaciones y exposición climática	Fletes, combustibles, turismo y seguros	Alimentos importados más caros y menor capacidad de respuesta

5. Las cooperativas agroalimentarias como infraestructura de resiliencia

En un contexto de inestabilidad geopolítica, las cooperativas agroalimentarias adquieren una importancia estratégica. No son solo una forma jurídica de organizar la producción o la comercialización; pueden funcionar como una infraestructura económica y social capaz de amortiguar impactos externos. Cuando suben los precios de la energía, los fertilizantes o los piensos, cuando se encarecen los fletes o cuando se interrumpen rutas comerciales, las explotaciones aisladas tienen menos capacidad de negociación, menos acceso a información y menor margen financiero. La cooperación permite ganar escala sin perder arraigo territorial.

Su primera función es mejorar el acceso a insumos críticos. En muchas zonas del mundo, especialmente allí donde predominan pequeñas y medianas explotaciones, el problema no es solo que los fertilizantes, semillas, piensos o combustibles sean caros, sino que llegan tarde, en cantidades insuficientes o con condiciones financieras inasumibles. Las cooperativas pueden agrupar compras, negociar mejores precios, organizar almacenamiento, facilitar pagos escalonados y reducir costes logísticos. En momentos de crisis, esta capacidad colectiva puede marcar la diferencia entre mantener una campaña agrícola o reducir drásticamente la siembra, con efectos sobre la producción futura.

La segunda función es fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria. La volatilidad geopolítica suele beneficiar a los eslabones con mayor capacidad financiera, logística y comercial, mientras que los productores primarios soportan buena parte del riesgo. Las cooperativas permiten concentrar oferta, mejorar la planificación, invertir en transformación y comercialización, y capturar más valor añadido en origen. Esto es relevante tanto en Europa,

donde la renta agraria y el relevo generacional son preocupaciones estructurales, como en África, Asia o América Latina, donde millones de pequeños productores necesitan acceso estable a mercados, crédito, asistencia técnica y almacenamiento.

La tercera función es reducir vulnerabilidades territoriales. Una cooperativa bien gestionada puede impulsar servicios compartidos de maquinaria, asesoramiento agronómico, digitalización, seguros, energías renovables, riego eficiente o economía circular. También puede contribuir a reducir pérdidas postcosecha mediante centros de acopio, frío, clasificación y transporte. En regiones frágiles, estas capacidades son tan importantes como la producción en sí misma: de poco sirve cosechar más si los alimentos se pierden, no llegan al mercado o se venden en condiciones desfavorables para el agricultor.

En Europa, las cooperativas pueden ser además una pieza clave para compatibilizar competitividad y transición verde. La adaptación a nuevas exigencias ambientales, la reducción de fertilizantes minerales, la implantación de prácticas de agricultura de carbono, el autoconsumo energético o la valorización de subproductos requieren inversiones que muchas explotaciones no pueden asumir individualmente. La dimensión cooperativa facilita proyectos colectivos y permite repartir costes, riesgos y conocimiento. En este sentido, las cooperativas no solo protegen frente a crisis externas, sino que pueden acelerar la transformación sostenible del sistema agroalimentario.

Por ello, las políticas públicas deberían apoyar su modernización, su acceso a financiación, la incorporación de jóvenes y mujeres, la digitalización y la cooperación entre cooperativas, especialmente en territorios vulnerables.

En definitiva, en un mundo donde la seguridad alimentaria depende cada vez más de factores externos —energía, rutas marítimas, divisas, conflictos y decisiones comerciales—, las cooperativas ofrecen una respuesta de proximidad. No sustituyen a la política pública ni a los mercados internacionales, pero ayudan a que agricultores, ganaderos, pescadores y consumidores estén menos solos ante las crisis. Su valor estratégico reside precisamente en conectar producción, territorio y comunidad en un momento en que la alimentación se ha convertido en una cuestión de seguridad global.

6. Qué políticas reducen la vulnerabilidad alimentaria

La primera respuesta es evitar el proteccionismo alimentario desordenado. Las prohibiciones de exportación pueden parecer útiles para contener precios internos, pero cuando las aplican varios países al mismo tiempo reducen la confianza, estrechan la oferta disponible y elevan la volatilidad. En mercados como el arroz, donde el comercio internacional representa una fracción limitada del consumo mundial, estas medidas pueden tener efectos desproporcionados.

La segunda respuesta es diversificar sin caer en la autarquía. Ninguna región puede aislarse por completo de los mercados mundiales, pero sí puede reducir dependencias críticas: más proveedores de fertilizantes, reservas estratégicas bien gestionadas, puertos alternativos, corredores logísticos seguros, eficiencia en el uso de nitrógeno, energías renovables en riego y producción local de alimentos básicos donde sea viable.

La tercera respuesta es proteger el acceso, no solo la producción. Cuando los alimentos existen pero son demasiado caros, la política clave es la protección social: transferencias monetarias, comedores escolares, ayudas focalizadas, compras públicas inteligentes y programas de nutrición. La seguridad alimentaria moderna es también una política de renta.

La quinta respuesta es garantizar acceso humanitario y financiación suficiente. En los focos de hambre aguda, la ayuda alimentaria y agrícola salva vidas, pero también protege medios de vida: semillas, herramientas, vacunación ganadera, piensos, efectivo y apoyo a mercados loca-

les. Sin seguridad y financiación, la comida puede quedarse fuera de las zonas donde más se necesita.

7. Conclusión: comer en un mundo fragmentado

La situación geopolítica mundial está transformando la seguridad alimentaria en una cuestión estratégica de primer orden. El alimento ya no puede analizarse separado de la energía, los fertilizantes, la logística, las finanzas públicas, la diplomacia y el clima. Una guerra en una región exportadora de energía puede elevar el precio de los fertilizantes; esa subida puede reducir la

fertilización de un cultivo; esa decisión puede disminuir rendimientos meses después; y ese menor suministro puede encarecer la cesta de la compra de hogares que ya destinan gran parte de su renta a alimentarse.


El mundo no se enfrenta únicamente a un problema de producción global. De hecho, algunos mercados de cereales siguen mostrando niveles de existencias relativamente cómodos. El problema es la distribución del riesgo: las regiones con mayor fragilidad política, menor renta, mayor dependencia importadora y menor capacidad fiscal son las que reciben con más fuerza los impactos de una geopolítica inestable.

Por eso, la seguridad alimentaria del futuro exigirá una doble estrategia. Por un lado, mantener abiertos los mercados y evitar que la fragmentación geopolítica rompa las cadenas alimentarias. Por otro, construir resiliencia local y regional para que los países no dependan de un único proveedor, una sola ruta o un solo insumo crítico. La clave no es elegir entre comercio internacional o autosuficiencia, sino combinar apertura, diversificación, reservas, sostenibilidad e inclusión social.

En última instancia, la seguridad alimentaria es una prueba de estabilidad global. Cuando la geopolítica encarece o bloquea alimentos, no solo aumenta el hambre: también crecen la conflictividad, las migraciones forzadas, la presión fiscal y la desconfianza social. Garantizar alimentos suficientes, asequibles y nutritivos no es únicamente una política agraria; es una política de paz.

Fuentes consultadas

- FAO. *Food Price Index*, abril de 2026, publicado el 8 de mayo de 2026.
- FAO. *Cereal Supply and Demand Brief*, 8 de mayo de 2026.
- World Bank. *Commodity Markets Outlook*, abril de 2026.
- World Bank. *Food Security Update*, marzo de 2026.
- World Food Programme. *Global Food Crisis / WFP Global Outlook 2026*.
- Food Security Information Network y Global Network Against Food Crises. *Global Report on Food Crises 2025*.
- FAO-WFP. *Hunger Hotspots: early warnings on acute food insecurity*, noviembre de 2025 a mayo de 2026.
- OCDE-FAO. *Agricultural Outlook y análisis de mercados agroalimentarios internacionales*



***SIMPLIFICAR SIN
RETROCEDER:*** el dilema
verde de la nueva política
agroalimentaria europea

Entradilla. La Unión Europea está reordenando su política agroalimentaria tras años de fuerte impulso ambiental y de creciente malestar agrario. La palabra clave ya no es solo sostenibilidad, sino simplificación: menos burocracia, más flexibilidad y mayor competitividad. El reto es que esa simplificación no se convierta en una rebaja de la ambición verde, sino en una forma más eficaz de hacerla aplicable en las explotaciones.

La política agroalimentaria europea vive un cambio de ciclo. Durante los años posteriores al Pacto Verde Europeo, Bruselas situó en el centro de su agenda la reducción de emisiones, la protección de la biodiversidad, la disminución de insumos químicos, la mejora de los suelos y la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Sin embargo, esa agenda se encontró con una realidad compleja: explotaciones con márgenes estrechos, costes crecientes, competencia exterior, envejecimiento del sector, sequías más frecuentes y una sensación extendida de carga administrativa excesiva.

El resultado ha sido una tensión política de fondo. Para muchos agricultores, la sostenibilidad europea ha llegado acompañada de trámites, controles e incertidumbre económica. Para las organizaciones ambientales, en cambio, el riesgo es que la respuesta institucional al malestar agrario diluya compromisos esenciales frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación del agua. Entre ambas posiciones, la Unión Europea intenta construir una nueva narrativa: simplificar las reglas, mejorar la renta agraria y mantener, al mismo tiempo, la orientación ambiental de la política agroalimentaria.

La pregunta que estructura este debate es sencilla de formular, pero difícil de resolver: ¿puede Europa simplificar su política agraria sin retroceder en sus objetivos verdes?

1. Del Pacto Verde a la Visión para la **Agricultura y la Alimentación**

En febrero de 2025, la Comisión Europea presentó su Visión para la Agricultura y la Alimentación, una hoja de ruta con horizonte 2040 que busca un sector agroalimentario atractivo, competitivo, resiliente, sostenible y justo. La elección de esos adjetivos no es casual: la Comisión ya no habla solo de transición ecológica, sino también de rentabilidad, relevo generacional, innovación, seguridad alimentaria y cohesión territorial.

El propio diagnóstico europeo muestra la magnitud del sector. Según la Comisión, el sistema agroalimentario de la UE generó en 2022 unos 900.000 millones de euros de valor añadido y sostuvo alrededor de 30 millones de empleos. Pero también arrastra una debilidad estructural: solo el 12 % de los agricultores europeos tiene menos de 40 años. En otras palabras, la transición verde no puede separarse de la pregunta por la viabilidad social y económica del campo.

La nueva visión no abandona la sostenibilidad. Incluye la contribución a los objetivos climáticos, la protección de la biodiversidad, la salud del suelo, el agua limpia, la reducción de emisiones, el acceso a biopesticidas, la agricultura de carbono y la digitalización. Lo que cambia es el tono: la Comisión intenta presentar la sostenibilidad como una oportunidad económica y no solo como una obligación regulatoria.

2. La simplificación como respuesta al **malestar agrario**

La simplificación no surge en el vacío. Las protestas agrarias que recorrieron varios países europeos en 2024 reflejaron una combinación de factores: bajos precios en origen, aumento de costes, competencia de importaciones, poder negociador desigual en la cadena alimentaria y rechazo a determinadas exigencias ambientales percibidas como difíciles de cumplir. El mensaje político fue claro: una transición impuesta sin suficiente rentabilidad ni acompañamiento puede perder legitimidad.

En mayo de 2025, la Comisión propuso un paquete de cambios de la Política Agrícola Común para reducir cargas administrativas. Entre las medidas planteadas figuraban el aumento del pago anual a tanto alzado para pequeños agricultores, la exención de determinadas reglas ambientales para pequeñas explotaciones, la consideración automática de las explotaciones ecológicas como cumplidoras de algunos requisitos ambientales, el uso de satélites y herramientas digitales para simplificar controles, y una nueva opción de financiación simple para pequeños agricultores.

El Consejo de la UE dio luz verde definitiva a la simplificación de la PAC en diciembre de 2025 dentro del llamado paquete Omnibus III. Según la evaluación inicial citada por el Consejo, las medidas podrían ahorrar hasta 1.600 millones de euros anuales a los agricultores y más de 200 millones a las administraciones nacionales. El Parlamento Europeo también respaldó normas más simples y mayor apoyo a las explotaciones pequeñas, con una ayuda anual de hasta 3.000 euros y un pago único de desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros.

Desde el punto de vista político, la simplificación cumple varias funciones. Reduce fricción burocrática, responde al malestar del sector, refuerza el discurso de competitividad y permite a la UE presentar una transición verde más pragmática. Pero también abre una zona de ambigüedad: no toda simplificación tiene el mismo significado ambiental.



3. Tres formas de entender la simplificación

Tipo de simplificación	Ejemplo	Efecto ambiental potencial
Administrativa	Evitar que el agricultor entregue los mismos datos varias veces o limitar inspecciones duplicadas.	Positivo o neutro: puede mejorar la aceptación de las medidas verdes.
Técnica	Usar satélites, cuaderno digital bien diseñado o sistemas interoperables para controles y pagos.	Positivo: puede aumentar la eficacia y reducir costes.
Regulatoria	Eximir determinadas explotaciones de requisitos ambientales o flexibilizar condiciones de la PAC.	Ambivalente: puede ser razonable si es proporcionado, pero problemático si reduce protección ambiental.

Esta distinción es decisiva. Simplificar formularios, coordinar bases de datos o evitar controles repetidos no rebaja la ambición ambiental; al contrario, puede hacerla más viable. En cambio, eliminar obligaciones de protección de suelos, agua, biodiversidad o paisaje puede significar una pérdida real de capacidad ambiental de la PAC. El debate no debería centrarse en si simplificar es bueno o malo, sino en qué se simplifica, cómo se evalúa y qué garantías se mantienen.

4. Competitividad y sostenibilidad: ¿alianza o conflicto?

La nueva política agroalimentaria europea también se explica por una preocupación creciente por la competitividad. Los agricultores europeos operan con estándares sanitarios, laborales y ambientales elevados, mientras compiten con productos de terceros países que no siempre soportan exigencias equivalentes. Esta percepción alimenta una crítica recurrente: Europa exige más dentro de sus fronteras, pero no siempre garantiza reciprocidad suficiente en las importaciones.

La respuesta no puede ser únicamente producir más barato. La ventaja europea difícilmente estará en competir por mínimos costes, sino en calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria,

innovación, indicaciones geográficas, bienestar animal y sostenibilidad verificable. Por eso, la competitividad y la sostenibilidad no tienen por qué ser objetivos opuestos. Una explotación que reduce dependencia de fertilizantes, mejora la eficiencia hídrica, aumenta materia orgánica del suelo o produce con menor vulnerabilidad climática puede ser ambientalmente mejor y económicamente más resistente.

5. El riesgo: simplificar como sinónimo de desregular

Las críticas ambientales a la nueva etapa europea no son menores. Algunas organizaciones ecologistas han advertido de que la Visión para la Agricultura y la Alimentación presta más atención a la competitividad y a la reducción de cargas que a cambios estructurales en el modelo alimentario. El European Environmental Bureau, por ejemplo, calificó la visión de débil y alertó de posibles retrocesos en las reglas ambientales vinculadas a las ayudas agrarias.

Esta crítica toca un punto sensible. El cambio climático, la erosión, la contaminación por nitratos, la pérdida de polinizadores y la presión sobre el agua no han desaparecido porque el debate político se haya desplazado hacia la simplificación. Al contrario, son problemas cada vez más urgentes para la propia continuidad de la agricultura. Rebajar la ambición ambiental puede ofrecer alivio a corto plazo, pero aumentar los riesgos productivos a medio y largo plazo.



Por eso, el verdadero equilibrio no consiste en elegir entre agricultores o medio ambiente. Consiste en diseñar políticas que paguen mejor los servicios ambientales, midan resultados de forma creíble y reduzcan burocracia innecesaria sin eliminar obligaciones esenciales. La simplificación solo será positiva si mejora la participación de los agricultores en prácticas sostenibles, no si sirve para aplazar decisiones incómodas.

6. La PAC posterior a 2027: una prueba decisiva

La futura PAC será la prueba de fuego. En abril de 2026, la Comisión publicó orientaciones para el diseño de acciones agroambientales y climáticas de cara a la PAC 2028-2034. El mensaje oficial es que la sostenibilidad ambiental seguirá siendo una prioridad, con un 43 % del gasto de los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación previsto para contribuir a objetivos ambientales y climáticos.

La novedad más relevante es la propuesta de simplificar el marco de ayudas verdes mediante un instrumento único de acciones agroambientales y climáticas que fusionaría elementos de los eco-regímenes y de los compromisos agroambientales actuales. Sobre el papel, la idea tiene lógica: menos dispersión de instrumentos, reglas más claras y pagos más comprensibles para las explotaciones. Pero su éxito dependerá de tres condiciones: financiación suficiente, indicadores ambientales verificables y estabilidad normativa.

La estabilidad es especialmente importante. Las explotaciones agrarias toman decisiones de inversión a varios años: riego eficiente, cubiertas vegetales, maquinaria de precisión, ganadería extensiva, agricultura ecológica, almacenamiento de purines o mejora de suelos. Si las reglas cambian constantemente o los pagos llegan tarde, la transición pierde credibilidad. La simplificación debe traducirse en confianza, no en incertidumbre.

Conclusión: simplificar para transformar, no para retroceder

La nueva política agroalimentaria europea se mueve en un terreno delicado. Por un lado, necesita escuchar a los agricultores, reducir trámites absurdos, mejorar la renta agraria y hacer viable el relevo generacional. Por otro, no puede ignorar que la agricultura depende de recursos naturales cada vez más presionados: suelo fértil, agua disponible, biodiversidad funcional y estabilidad climática.

La simplificación será una oportunidad si sirve para que la sostenibilidad sea más practicable, mejor pagada y menos burocrática. Será un retroceso si se convierte en una coartada para debilitar estándares ambientales sin resolver los problemas económicos de fondo. La Unión Europea no debería plantear el debate como una elección entre campo y medio ambiente, porque ambos están unidos. Sin agricultores no hay sistema alimentario; sin límites ambientales no hay agricultura futura.

El reto de los próximos años será construir una política agroalimentaria capaz de unir tres palabras que a menudo se presentan como contradictorias: competitividad, simplificación y ambición verde. Si Europa logra que se refuercen mutuamente, habrá dado un paso importante hacia un modelo alimentario más justo, más resiliente y más preparado para el cambio climático. Si no lo consigue, la simplificación quedará como una respuesta política inmediata a una crisis de legitimidad, pero no como una verdadera estrategia de futuro.

La simplificación no debe medirse por el número de normas eliminadas, sino por su capacidad para hacer que más explotaciones adopten prácticas sostenibles con rentabilidad, seguridad jurídica y menor carga administrativa.

Fuentes consultadas

- Comisión Europea. Vision for Agriculture and Food, presentada en febrero de 2025. https://agriculture.ec.europa.eu/overview-vision-agriculture-food/vision-agriculture-and-food_en
- Comisión Europea. Simplifying farmers' lives, 14 de mayo de 2025. https://commission.europa.eu/news-and-media/news/simplifying-farmers-lives-2025-05-14_en
- Consejo de la Unión Europea. Council signs off simplification of Common Agricultural Policy, 18 de diciembre de 2025. https://commission.europa.eu/news-and-media/news/simplifying-farmers-lives-2025-05-14_en
- Parlamento Europeo. Parliament endorses simpler rules and more support for farmers, diciembre de 2025. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/18/council-signs-off-simplification-of-common-agricultural-policy/>
- Comisión Europea. Driving sustainable farming: new guidance for CAP 2028-2034, 28 de abril de 2026. https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/driving-sustainable-farming-new-guidance-cap-2028-2034-2026-04-28_en
- European Environmental Bureau. EU farm vision lacks vision, 19 de febrero de 2025. <https://eeb.org/en/eu-farm-vision-lacks-vision/>
- Associated Press. Farmers from 10 EU countries join forces – and tractors – to protest agricultural policies, febrero de 2024. <https://apnews.com/article/farmers-european-union-protest-czech-poland-slovakia-931b767c20076281451bccab70f70084>



***La Ley 1/2025 de
Desperdicio Alimentario:
Claves, Aplicación
Práctica y su Impacto
en las Cooperativas de
Castilla-La Mancha***

La entrada en vigor de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ha marcado un antes y un después en la forma en que el sector agroalimentario español gestiona sus recursos. Esta normativa, pionera a nivel estatal, no solo responde a un imperativo ético y medioambiental anclado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, sino que también introduce un nuevo marco normativo de obligado cumplimiento para todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Para una región como Castilla-La Mancha, donde el tejido cooperativo representa el motor económico, social y demográfico del medio rural, esta ley supone tanto un desafío de adaptación burocrática y operativa como una oportunidad para consolidar la economía circular. En este artículo analizaremos en profundidad los pilares fundamentales de la Ley 1/2025, las obligaciones prácticas que impone a las empresas y, de manera específica, cómo afecta a la gestión de productos clave en las cooperativas castellanomanchegas: el vino, el aceite de oliva, los frutos secos, el ajo, el champiñón, etc.

1. Aspectos Clave de la Ley 1/2025: Un Cambio de Paradigma

La Ley 1/2025 abandona las tradicionales medidas de “recomendación” para establecer un marco de obligaciones legales, trazabilidad y control. Su objetivo principal es claro: reducir al mínimo la cantidad de alimentos que, siendo aptos para el consumo o la valorización, terminan en el vertedero. Para lograrlo, la normativa establece varios pilares fundamentales:

La Jerarquía de Prioridades

La ley impone una pirámide de actuación estricta para la gestión de los excedentes alimentarios. Las empresas ya no pueden decidir arbitrariamente qué hacer con sus mermas; deben seguir este orden:

1. Consumo humano directo: La máxima prioridad. Se debe fomentar la donación de excedentes a bancos de alimentos, ONG y entidades de iniciativa social.
2. Transformación y procesamiento: Si el alimento no puede venderse en su forma original (por ejemplo, por defectos estéticos), debe transformarse en otros productos aptos para consumo humano (zumos, mermeladas, conservas, harinas, caldos).
3. Alimentación animal: Cuando el producto ya no sea apto para el consumo humano, se destinará a la fabricación de piensos o alimento directo para el ganado, siempre que cumpla con las garantías sanitarias.
4. Uso industrial y subproductos: Reutilización en industrias no alimentarias.
5. Valorización energética y compostaje: Como última opción antes del vertedero, los residuos se destinarán a la obtención de compost de calidad para la agricultura o a la generación de biogás.

Definición de Pérdida vs. Desperdicio

La normativa distingue conceptualmente entre “pérdida” (la que ocurre en las fases de producción agrícola, postcosecha y procesamiento industrial) y “desperdicio” (el que se da en las fases de distribución, comercio minorista, hostelería y hogares). Las cooperativas agroalimentarias lidian principalmente con el primer concepto, lo que les exige afinar sus procesos de recolección, selección y almacenamiento.



2. Aplicación Práctica: ¿Qué deben hacer las empresas y cooperativas?

Para cumplir con la Ley 1/2025, las cooperativas e industrias agroalimentarias deben aterrizar la teoría legal en operaciones diarias. Los requerimientos más críticos son:

A. Elaboración del Plan de Prevención de Pérdidas y Desperdicio

Este es el núcleo de las obligaciones empresariales. Cada cooperativa debe redactar y aplicar un "Plan de Prevención" documentado. Este plan no es un trámite estático, sino un sistema de gestión dinámico que debe incluir:

- **Mapa de mermas (Autodiagnóstico):** Identificar en qué puntos exactos de la cadena (recepción, selección, calibrado, almacenamiento, envasado) se producen las pérdidas y cuantificarlas.
- **Medidas correctoras:** Establecer protocolos para minimizar esas mermas, como la mejora de la cadena de frío, la optimización del calibrado o el cambio de envases para alargar la vida útil.
- **Indicadores (KPIs):** Medir anualmente el volumen de pérdidas generadas y el destino que se les ha dado, permitiendo una trazabilidad total.

Los planes de prevención del desperdicio alimentario serán plenamente exigibles a partir del 3 de abril de 2026, aunque en la práctica se prevé un tiempo de puesta en marcha, no oficial, que permita su implementación en las empresas.

B. Formación y Concienciación del Personal

Aunque la ley no exige una certificación oficial externa e independiente, sí obliga a las empresas a garantizar la formación de su plantilla. Esta formación debe integrarse en los planes de prevención de riesgos o de higiene alimentaria, e incidir en:

- Manipulación cuidadosa del producto en el campo y en las líneas de triaje para evitar daños mecánicos.

- Reconocimiento temprano de productos perecederos que deben ser derivados a transformación.
- Cultura empresarial de “desperdicio cero”.

C. Convenios de Donación Formalizados

Para cumplir con el primer escalón de la jerarquía (consumo humano), las cooperativas deben establecer acuerdos por escrito con bancos de alimentos u ONG. Estos convenios deben especificar las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte, asegurando que no se rompa la cadena de frío y que la trazabilidad sanitaria se mantenga intacta.

3. El Impacto Específico en las Cooperativas de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con una diversidad agroalimentaria formidable. Sin embargo, cada producto presenta retos únicos a la hora de aplicar la Ley 1/2025. Las cooperativas deben adaptar sus Planes de Prevención a la naturaleza perecedera, estacional y física de cada cultivo.

Vino y Mosto: La Gestión de la Vendimia

Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo. En las cooperativas vitivinícolas, la ley impacta desde el momento de la entrada de la uva.

- **Pérdidas de materia prima:** Aquellas uvas que lleguen dañadas por inclemencias meteorológicas o sobremaduración ya no pueden ser simplemente desechadas. Si no cumplen los estándares para vinos de calidad o Denominación de Origen, la cooperativa debe tener protocolos ágiles para derivarlas a la elaboración de mostos concentrados, alcoholes de uso de boca o vinagres.
- **Subproductos (Orujos y lías):** La industria del vino ya es pionera en economía circular. Sin embargo, ahora es obligatorio documentar formalmente en el Plan de Prevención la entrega de los orujos, pepitas y raspones a las alcoholeras o su derivación final para la extracción de aceite de pepita de uva, ácido tartárico o biomasa. Todo debe quedar registrado para demostrar que no existe desperdicio.



Aceite de Oliva: Del Campo a la Almazara

El sector del olivar castellanomanchego se enfrenta a la dualidad entre la búsqueda de la calidad (AOVE) y la gestión integral del subproducto.

- **Clasificación en patio:** Las aceitunas recogidas del suelo o atrojadas, que sufren daños mecánicos y no son aptas para aceites vírgenes, deben documentarse claramente y derivarse a la producción de aceites lampantes (que posteriormente se refinarán para consumo).
- **El Alperujo:** Al igual que en el vino, el principal reto volumétrico de la almazara es el alperujo (mezcla de agua de vegetación, piel, hueso y pulpa). Las cooperativas deben certificar los contratos con las orujeras (plantas de extracción secundaria) y asegurar que el hueso de aceituna extraído y secado se valoriza energéticamente, cerrando el ciclo en cumplimiento estricto con la ley.

Frutos Secos (Almendra y Pistacho): El Reto de la Estética

El cultivo de almendra y pistacho ha experimentado una expansión meteórica en provincias como Albacete, Ciudad Real y Toledo. Aquí el reto es principalmente estético y de calibre.

- **Aprovechamiento humano:** Durante el pelado, secado y calibrado, muchos frutos sufren roturas, muescas o manchas en la piel. La Ley 1/2025 prohíbe taxativamente descartar estos productos si organolépticamente son aptos. Las cooperativas deben establecer alianzas comerciales con la industria turroneira, repostera, heladera o de elaboración de harinas y pastas de frutos secos para dar salida al producto "feo" o partido.
- **Cáscaras y pieles:** Las pieles (envoltura carnosa) del pistacho y la almendra puede destinarse a alimentación animal o compostaje, mientras que la cáscara dura se consolida, legal y documentalmente, como una excelente fuente de biomasa térmica para el propio secado del producto.

Ajos: La Conservación del "Oro Morado"

Con el epicentro en Las Pedroñeras (Cuenca), el ajo es un producto de conservación delicada que requiere un control exhaustivo de temperatura y humedad para evitar la deshidratación o la brotación (grillado) prematura.

- **Plan de acción precoz:** El Plan de Prevención de una cooperativa ajera debe estar íntimamente ligado a los sensores de sus cámaras frigoríficas. Antes de que un lote pierda su aptitud comercial para la venta en fresco debido a defectos estéticos, destrío de la maquinaria de limpieza o un inicio temprano de brotación, debe existir una ruta de escape.
- **Transformación industrial:** Estos ajos deben ser derivados rápidamente a industrias de IV y V gama para la elaboración de ajo pelado, pasta de ajo, ajo negro o ajo deshidratado/lioofilizado. El destrío puro (raíces, pieles secas) debe documentarse hacia su uso como compost agrícola.

Champiñón y Hongos: La Carrera contra el Reloj

La comarca de La Manchuela (Cuenca y Albacete) aglutina gran parte de la producción nacional de champiñón. Al tratarse de un producto altamente perecedero y con un contenido en agua superior al 90%, el riesgo de pérdida por rotura de la cadena de frío o sobreproducción es altísimo.

- **Gestión de excedentes rápidos:** La ley obliga a las cooperativas de champiñón a ser extremadamente ágiles. Los champiñones manchados, de calibres irregulares o aquellos que sufren daños por roce en las bandejas deben ser separados inmediatamente.

- **Conservas:** La alianza con la industria conservera es la tabla de salvación. El champiñón laminado en conserva, congelado o destinado a cremas y salsas de la industria alimentaria representa el segundo escalón de la pirámide de la Ley 1/2025. Las cooperativas deben reflejar en su plan logístico cómo evacúan este producto de calidad subestándar (en términos estéticos) en menos de 24-48 horas para evitar que se convierta en residuo biológico.



Conclusión

La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario no es un mero trámite burocrático más; representa una reconfiguración profunda del modelo productivo. Exige pasar de un sistema reactivo frente a los excedentes, a uno preventivo y estratégico.

Para las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, el cumplimiento de esta ley implica un esfuerzo inicial de auditoría interna, papeleo corporativo (como el Plan de Prevención y los acuerdos de donación) y capacitación exhaustiva del personal. Sin embargo, a medio y largo plazo, la reducción de las mermas se traduce invariablemente en un ahorro de costes operativos y en la apertura de nuevas líneas de negocio derivadas de la valorización de subproductos.

Aquellas cooperativas que integren inteligentemente la jerarquía de usos de la Ley 1/2025 no solo evitarán las sanciones previstas, sino que afianzarán su posición en un mercado global que exige, cada día con más fuerza, una sostenibilidad real, demostrable y trazable. El objetivo final es unánime: que todo el esfuerzo, el agua y la energía invertidos en el campo castellanomanchego termine alimentando a la sociedad, y no llenando los contenedores.





**AYUDAS TEMPORALES
CRISIS ENERGÉTICA
y SEGURIDAD
ALIMENTARIA**

La respuesta de la Unión Europea a la crisis de Oriente Próximo y su impacto en el sistema agroalimentario

Artículo basado en la Comunicación de la Comisión C/2026/2593, de 5 de mayo de 2026

Entradilla. La nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre el marco temporal de ayuda en respuesta a la crisis en Oriente Próximo muestra hasta qué punto la política agroalimentaria ya no puede analizarse al margen de la energía, la geopolítica y la seguridad de suministro. El encarecimiento del petróleo, el gas y los fertilizantes reabre el debate sobre la capacidad de la Unión para proteger a agricultores, pescadores, transportistas y consumidores sin comprometer la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles.

1. Una crisis geopolítica con efectos económicos inmediatos

La Comunicación C/2026/2593 parte de una premisa clara: la crisis de Oriente Próximo de 2026 no es un conflicto lejano para la economía europea. El cierre de facto del estrecho de Ormuz y las tensiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas han provocado aumentos significativos de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes en los mercados mundiales. La Comisión destaca que, desde el 27 de febrero de 2026, los precios del crudo aumentaron un 50 % y los del gas natural un 85 % antes de moderarse ligeramente. Este dato resume la magnitud del choque y explica por qué Bruselas ha optado por activar un marco temporal de ayudas estatales.

El efecto no se limita al coste de llenar un depósito o pagar una factura eléctrica. La energía atraviesa todo el sistema económico: condiciona el precio de los fertilizantes nitrogenados, eleva los costes del transporte, encarece la producción primaria y termina presionando los precios de los alimentos. Por eso la Comisión plantea una respuesta preventiva, específica y limitada en el tiempo, antes incluso de que la perturbación económica se materialice de forma más intensa en todos los Estados miembros.

La decisión tiene además una dimensión institucional importante. La UE vuelve a utilizar la experiencia acumulada durante la pandemia de COVID-19 y la crisis derivada de la agresión rusa contra Ucrania: cuando el mercado interior se enfrenta a una perturbación excepcional, las normas ordinarias de ayudas de Estado pueden flexibilizarse, pero dentro de límites comunes para evitar una carrera desordenada de subvenciones nacionales.

2. El sector agroalimentario, en el centro del problema

Aunque la Comunicación abarca agricultura, pesca, acuicultura, transporte, energía, navegación marítima y aviación, su relevancia agroalimentaria es evidente. La cadena alimentaria europea depende de tres factores muy sensibles al choque actual: fertilizantes, combustibles y logística. Si cualquiera de esos elementos falla, el impacto no se queda en la cuenta de resultados de una explotación, sino que puede llegar a la disponibilidad, regularidad y precio de los alimentos.

La Comisión subraya que los fertilizantes desempeñan un papel destacado en la seguridad alimentaria y que constituyen uno de los principales costes de insumos de los agricultores. Además, la dependencia de las importaciones y la volatilidad del mercado hacen especialmente vulnerable a la agricultura europea. El dato es muy expresivo: en marzo de 2026 los precios de los fertilizantes nitrogenados en la Unión se situaban en torno a un 61 % por encima de la media de 2024, tras estar ya un 29 % por encima en febrero.

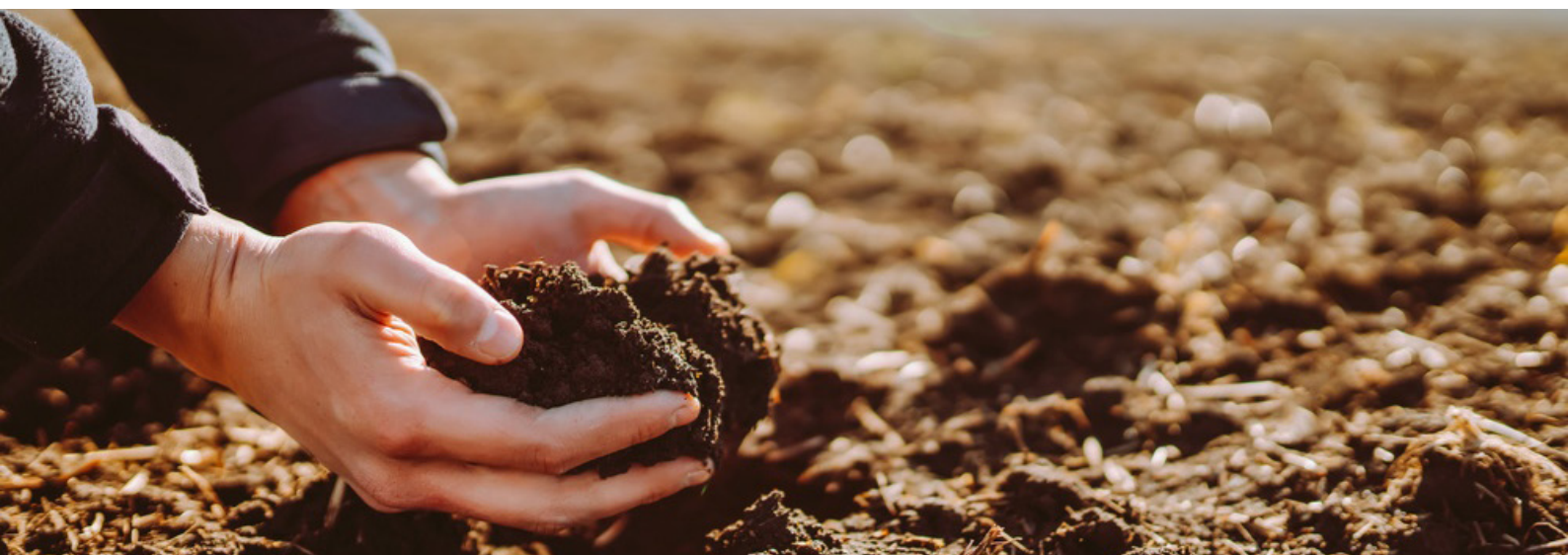
La razón de fondo es conocida: la producción de fertilizantes nitrogenados está fuertemente vinculada al gas natural. Por tanto, cuando sube el gas, se tensiona el coste del fertilizante; cuando se tensiona el fertilizante, se encarece o se dificulta la producción agraria; y cuando la producción agraria se encarece, toda la cadena alimentaria queda expuesta. Esta conexión convierte la crisis energética en una crisis potencial de seguridad alimentaria.

3. Ayudas de Estado: apoyo urgente, pero no cheque en blanco

La base jurídica elegida por la Comisión es el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta disposición permite declarar compatibles con el mercado interior determinadas ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de actividades económicas, siempre que no alteren los intercambios en forma contraria al interés común. La Comunicación no suspende la disciplina de ayudas de Estado: la adapta a una crisis concreta.

El diseño es deliberadamente acotado. Las ayudas deben ser necesarias, adecuadas, proporcionadas y limitadas en el tiempo. También deben tener efecto incentivador, es decir, permitir que la empresa mantenga una actividad económica que, sin apoyo, se reduciría, se retrasaría o incluso se interrumpiría. La Comisión insiste en evitar la sobrecompensación: no se trata de cubrir cualquier pérdida, sino de amortiguar costes extraordinarios directamente vinculados a la evolución de los mercados afectados por la crisis.

Esta precisión es fundamental. La UE quiere preservar la continuidad de sectores expuestos, pero sin romper la igualdad de condiciones dentro del mercado único. Si cada Estado miembro pudiera subvencionar sin límites a sus empresas, los países con mayor capacidad fiscal podrían dar ventaja competitiva artificial a sus operadores. El marco temporal intenta precisamente compatibilizar solidaridad, urgencia y competencia leal.



4. Agricultura: fertilizantes, gasóleo y vulnerabilidad estacional

La agricultura recibe una atención específica porque su vulnerabilidad es distinta a la de otros sectores. El agricultor decide y adelanta buena parte de sus costes antes de conocer plenamente los ingresos de la campaña. Semillas, fertilizantes, combustible, labores y tratamientos se pagan antes de la cosecha, mientras que la capacidad de corregir decisiones productivas a corto plazo es limitada. Un encarecimiento repentino de fertilizantes y combustibles puede afectar a toda la producción anual.

Por eso la Comunicación permite que los Estados miembros articulen regímenes de ayuda para empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. La ayuda puede cubrir hasta el 70 % de los costes extraordinarios derivados de la crisis cuando el precio del combustible o fertilizante supere el precio histórico de referencia determinado por el Estado miembro con hipótesis razonables e índices reconocidos. El período subvencionable se sitúa entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

La ayuda puede adoptar distintas formas: subvenciones directas, ventajas fiscales o de pago, anticipos reembolsables, garantías, préstamos o capital. La Comunicación permite incluso anticipos antes de verificar toda la documentación, siempre que exista una comprobación posterior y un mecanismo de recuperación de importes indebidos. Con ello, la Comisión intenta resolver una tensión clásica de las crisis: si la ayuda llega demasiado tarde, puede ser jurídicamente impecable pero económicamente inútil.

Existe también una vía simplificada: los Estados miembros pueden calibrar importes en función de indicadores como tamaño, tipo de actividad, consumo estimado de combustible o fertilizante o superficie utilizada, siempre que la ayuda total no supere los 50.000 euros por empresa. Para muchas explotaciones pequeñas y medianas, esta opción puede ser más operativa que un cálculo individualizado complejo.

5. Pesca, acuicultura y transporte: la cadena alimentaria no termina en la explotación

La Comunicación acierta al no limitar la mirada al campo. La seguridad alimentaria depende también de la pesca, la acuicultura y el transporte. En los puertos pesqueros de la Unión, los combustibles marítimos han fluctuado en torno a 1,0-1,3 euros por litro, con un aumento de más de 0,4 euros por litro desde el inicio de la crisis. La Comisión advierte de que, si esos precios se mantienen, una parte significativa de la flota podría cesar actividades.

La acuicultura marina tampoco es inmune. Muchas explotaciones dependen de embarcaciones auxiliares para alimentar, mantener, repoblar o cosechar, y la Comunicación señala que el combustible puede representar hasta el 20 % de los gastos totales, e incluso el 30 % en algunos casos. La imagen de una acuicultura desvinculada del petróleo es, por tanto, incompleta.

El transporte terrestre añade otra capa de fragilidad. La Comisión señala que los precios del gasóleo aumentaron aproximadamente un 21 % en marzo de 2026 respecto al mismo mes de 2025. También recuerda que los márgenes de los transportistas por carretera suelen situarse en torno al 2-3 %, mientras que el combustible puede representar alrededor del 30 % de los costes de los operadores de mercancías y el 20 % de los de viajeros. En una cadena agroalimentaria cada vez más integrada, una crisis del transporte puede traducirse en retrasos, encarecimiento y menor resiliencia logística.

6. La clave ambiental: ayudar sin perpetuar la dependencia fósil

El aspecto más interesante de la Comunicación es que no se limita a justificar ayudas. También introduce una cautela ambiental y estratégica: toda ayuda temporal debe mantener los incentivos de reducción de la demanda de energía y no poner en peligro la transición hacia el uso de energía limpia.

La Comisión lo expresa con claridad: acelerar renovables, tecnologías hipocarbónicas y almacenamiento refuerza la resiliencia, reduce la dependencia de combustibles fósiles importados y protege frente a subidas de precios provocadas por factores externos.

Este punto es decisivo para un análisis medioambiental. La crisis demuestra que la dependencia fósil no solo es un problema climático; también es un problema económico, geopolítico y alimentario. Cuanto más dependen agricultores, industrias de fertilizantes, flotas y transportistas de insumos energéticos importados y volátiles, más vulnerable es el sistema alimentario europeo ante conflictos externos.

Por tanto, la pregunta no es únicamente cuánto dinero público puede mobilizarse, sino hacia dónde orienta los incentivos. Si la ayuda se limita a compensar el coste del gasóleo o del gas, puede aliviar la urgencia, pero dejar intacta la vulnerabilidad estructural. Si se acompaña de inversión en eficiencia energética, fertilizantes bajos en carbono, economía circular de nutrientes, electrificación, energías renovables y logística más sostenible, la crisis puede convertirse en palanca de transformación.

7. Un equilibrio difícil: liquidez hoy, resiliencia mañana

La Comunicación se mueve en un equilibrio delicado. Por un lado, sería irresponsable dejar que una crisis de precios destruya explotaciones viables, paralice flotas o debilite rutas logísticas esenciales. La producción agroalimentaria tiene ritmos biológicos y estacionales que no pueden reiniciarse de un día para otro. Una explotación que no puede comprar fertilizante o combustible en el momento adecuado puede perder una campaña entera.

Por otro lado, la ayuda pública mal diseñada puede generar efectos indeseados: subvencionar consumos ineficientes, retrasar inversiones en tecnologías limpias, favorecer a empresas que no son viables o distorsionar la competencia entre Estados miembros. Por eso la Comisión impone límites: presupuestos definidos, plazos concretos, relación con costes extraordinarios, exclusión general de empresas que ya estuvieran en crisis antes del 28 de febrero de 2026 y obligaciones de transparencia y conservación de registros.

La transparencia también es relevante. Los Estados miembros deben publicar información sobre cada ayuda individual superior a 100.000 euros, y superior a 10.000 euros en agricultura primaria y pesca, así como conservar registros detallados durante diez años. Estas exigencias permiten controlar que la urgencia no se convierta en opacidad.

8. Lectura para España, Castilla-La Mancha y para el debate agroalimentario

Para España, la Comunicación tiene una lectura especialmente práctica. El país cuenta con un sector agroalimentario muy expuesto al precio de fertilizantes, gasóleo agrícola, transporte por carretera, pesca y costes energéticos de la industria transformadora. También posee una estructura productiva con muchas pequeñas y medianas explotaciones, para las que la liquidez de campaña y la simplicidad administrativa son factores decisivos.

La aplicación nacional del marco debería evitar dos errores. El primero sería diseñar ayudas demasiado complejas, que solo aprovechen operadores con más capacidad administrativa. El segundo sería convertir el apoyo coyuntural en una compensación permanente de combustibles fósiles. La respuesta más inteligente sería combinar ayudas rápidas y verificables con instrumentos de modernización: eficiencia en maquinaria, fertilización de precisión, producción y uso de fertilizantes orgánicos y circulares, biogás, electrificación de procesos, autoconsumo renovable y contratos logísticos más eficientes.

Para Castilla-La Mancha, esto significa que el marco europeo puede ofrecer una vía de apoyo coyuntural para agricultores, cooperativas, industrias agroalimentarias y operadores logísticos, pero también refuerza una conclusión de fondo: la competitividad futura del sector regional dependerá cada vez más de reducir su vulnerabilidad energética, mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, avanzar en economía circular y fortalecer estructuras colectivas como las cooperativas.

En definitiva, la Comunicación no debe leerse como una pausa en la transición verde, sino como una prueba de estrés para ella. La transición será creíble si protege a quienes producen alimentos durante una crisis, pero también si reduce las causas de su vulnerabilidad.

Conclusión

La Comunicación C/2026/2593 refleja una idea central de la política europea actual: la seguridad económica, la seguridad energética y la seguridad alimentaria ya forman parte de un mismo debate. La crisis de Oriente Próximo ha mostrado que un conflicto geopolítico puede encarecer el gas, tensionar los fertilizantes, elevar los costes agrícolas, paralizar buques, presionar al transporte y acabar afectando a la cadena alimentaria.

La respuesta de la Comisión es pragmática: permitir ayudas temporales, específicas y proporcionadas para evitar rupturas de actividad, pero sin renunciar a la transición hacia energía limpia y menor

dependencia exterior. Ese equilibrio será el verdadero examen del marco temporal. Si las ayudas solo tapan el agujero de costes de 2026, el problema volverá con la siguiente crisis. Si sirven para sostener a los sectores vulnerables mientras aceleran eficiencia, descarbonización y autonomía estratégica, Europa habrá convertido una crisis en una oportunidad de resiliencia.

El mensaje de fondo es claro: no hay seguridad alimentaria duradera sin seguridad energética, y no hay seguridad energética estable sin una reducción profunda de la dependencia fósil.

CLAVES DE LA COMUNICACIÓN:

Ámbito	Problema identificado	Respuesta temporal prevista
Agricultura	Fuerte aumento de fertilizantes y combustibles; vulnerabilidad por ciclos estacionales y costes anticipados.	Ayudas hasta el 70 % de costes extraordinarios; posible enfoque simplificado hasta 50.000 euros por empresa.
Pesca y acuicultura	Subida del combustible marítimo; riesgo de paralización de flota y reducción de inversiones.	Ayudas temporales para producción primaria pesquera y acuícola, con control de proporcionalidad.
Transporte terrestre	Márgenes reducidos y encarecimiento del gasóleo, con riesgo para cadenas de suministro.	Ayudas temporales para ferrocarril, carretera y vías navegables interiores; impulso al cambio modal.
Transporte marítimo de corta distancia	Riesgo para rutas esenciales, cohesión territorial e islas.	Ayudas temporales a costes extraordinarios de combustible, sin cubrir costes del RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE)
Energía	Subida de precios mayoristas y vulnerabilidad por dependencia fósil importada.	Flexibilidad temporal, pero preservando señales de inversión en energía limpia.

Fuente principal consultada

Comisión Europea. Comunicación de la Comisión: Marco temporal de ayuda en respuesta a la crisis en Oriente Próximo (C/2026/2593), Diario Oficial de la Unión Europea, Serie C, 5 de mayo de 2026.

SEDE SOCIAL

Avda. de Criptana, 43
13600 Alc zar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Faz: 926 54 52 08

DELEGACI N TOLEDO

Ronda de Buenavista, 15-2 
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Faz: 925 21 99 16

DELEGACI N ALBACETE

C/ Rosario, 6 5  Puerta 12
02001 Albacete
Telef.: 607 823 122
Faz: 967 24 10 19

DELEGACI N CUENCA

Plaza de la Hispanidad, 10, 4 A
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Faz: 969 22 58 01

DELEGACI N CIUDAD REAL

C/ Juan II, 1A-5B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Faz: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop



cooperativas
agro-alimentarias
Castilla-La Mancha